

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-15178-2018  
CARATULADO : LOYOLA/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE  
DEFENSA DEL ESTADO

**Santiago, diez de julio de dos mil diecinueve.**

**Vistos:**

Con fecha 23 de mayo de 2018, comparecen don Boris Paredes Bustos, doña Magdalena Garcés Fuentes y don Sebastián Velásquez Díaz, abogados, en representación de don **María Angélica Natacha Loyola Loyola**, jubilada, domiciliada en pasaje Puerto Cisne N° 2410, comuna de Puerto Varas, quienes vienen en deducir demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **Fisco de Chile**, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, Santiago, Región Metropolitana, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Con fecha 11 de junio de 2018, se notificó personalmente la demanda y su proveído a la demandada de autos, mediante su representante legal.

Con fecha 28 de junio de 2018, la demandada contestó la demanda deducida en su contra.

Con fecha 12 de julio de 2018, la demandante evacuó el trámite de la réplica.

Con fecha 30 de julio de 2018, la demandada evacuó el trámite de la dúplica.

Con fecha 04 de octubre de 2018, se recibió la causa a prueba, notificándose a las partes con fecha 06 de noviembre de 2018, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los allí señalados.

Con fecha 26 de noviembre de 2018, consta el hecho de haberse rechazado recurso de reposición en contra de la resolución que recibió la causa a prueba.

Con fecha 14 de febrero de 2019, se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, con fecha 23 de mayo de 2018, comparecen don Boris Paredes Bustos, doña Magdalena Garcés Fuentes y don Sebastián Velásquez Díaz, en representación de don María Angélica Natacha Loyola Loyola, quienes vienen en deducir demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Fundan su pretensión en los hechos reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile, a través de la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura, VALECH 2010,



registro N° 4838, respecto a que su representada a la edad de 34 años se encontraba separada de su marido y con 3 hijos, cuando el 21 de agosto de 1974, en su lugar de trabajo en El Servicio de Seguro Social, sucursal de Colina, donde se desempeñaba como funcionaria administrativa, fue secuestrada por dos hombres en horario de colación.

Explican que su representada se encontraba almorzando en la casa contigua a la sucursal, cuando un trabajador de ese lugar le dijo que una camioneta celeste había estado estacionada al frente toda la mañana, momento en que uno de los hombres, con terno oscuro y lentes, se dirigió preguntando por la señora Natacha, a lo que ella respondió. Que, el hombre le comunicó que venían a buscarla porque en su casa se había producido un robo, atemorizándola porque sus hijas de 14, 13 y 10 años estaban solas en la casa o estaban prontas a llegar del colegio. Agregan que antes de irse con los hombres, fue a su oficina a devolver las llaves, encontrándose con un compañero de trabajo a quien le cuenta que la habían ido a buscar.

Continúan exponiendo que llevaron a su representada a la Comisaría de Huechuraba con Independencia, donde un hombre alto, tipo alemán, dijo que “a esta mujer hay que darle” (sic), dando un número y retirándose de la pieza, momento en que uno de los hombres que la fue a buscar comenzó a golpearla y a preguntarle dónde estaban las armas, a lo que responde que no sabía. Añaden que a dicha pieza ingresaron más personas a quienes también se les preguntó por las armas, entre ellas Cristina Silva, quien le comentó que igualmente la habían llevado a la comisaría, momento en que a la demandante y a otra persona más les pusieron cinta adhesiva en sus ojos y los subieron a una camioneta, trasladándolos a una casa que tenía un fuerte olor, donde sintió voces de niños y personas que se quejaban, dejándola sola en una pieza donde recibió una fuerte golpiza y las amenazas de que sus hijas pagarían si no decía donde estaban las armas, perdiendo la noción del tiempo.

Indican que cuando la actora se recuperó, la subieron por una escalera completamente desnuda junto a Cristina Silva, donde muchos hombres comentaban que ambas mujeres estaban indispuestas por la golpiza que habían recibido, jugando con ellas a la ruleta rusa y acostándolas en una cama para ponerles corriente, mientras les preguntaban por las armas, a lo que ambas contestaban que nunca las vieron. Relatan que su representada, desconoce el tiempo que estuvieron en ese lugar, pero que luego las bajaron a un lugar donde ladraban perros y circulaban muchos militares, por su forma de hablar, donde no las dejaron por estar todos ocupados. Indican que posteriormente llevaron a su representada a su domicilio, donde escuchó a sus hijas y sintió terror que los militares que allí estaban les pudieran hacer algo a ellas, para luego subirla nuevamente a un camión con dirección a la casa de Alberto Arias, a quien subieron para trasladarlos a todos a la casa donde ya habían torturado



a su representada y a Cristina, en Londres 38, donde los dejaron solos para que conversaran un momento. Que, al rato separan a Alberto de las mujeres, propinándoles a ambas una golpiza más fuerte que la primera vez y amenazando a la demandante que de no dar nombres de sus compañeros, serían sus hijas quienes lo pagarían, respondiéndoles que ella no sabía nada de ellos desde el 11 de septiembre de 1973.

Exponen que el torturador le comentó a la demandante que ella era importante, ya que desde el exterior estaban tratando de obtener su liberación, pero como una de sus vecinas vio como ella enterraba las armas, lo que era absolutamente falso, lo más probable es que ella saliera sin vida de ese lugar si no confesaba. Que, luego la llevaron a un lugar donde no pudo dormir, sin saber cuánto tiempo pasaría, escuchando gritos de otras personas, con el cuerpo sucio y adolorido por los golpes, y percatándose que dos hombres comentaban que del Ministerio del Interior llamaron para dejar libre a las mujeres, razón por la que abandonaron a ambas en Avenida Matta, donde un taxi las recogió, llevándola finalmente a su domicilio.

Señalan que al constatar que sus hijas estaban sanas, se fueron a vivir a Colina para poder vivir más tranquilas, aunque cada cierto tiempo un funcionario de la PDI se presentaba para amedrentarla y recordarle que no debía contar a nadie lo vivido ni quienes la detuvieron, ya que la seguían vigilando, razón por la que decidió cambiarse de casa a la comuna de Independencia, donde también apareció, por última vez, un funcionario de la PDI que le preguntó porqué no le había contado a ellos su cambio de casa. Que, de esa forma se dio término a 10 años de sufrimiento y llanto, desde el año 1974 hasta el año 1984, período en que se sintió muerta en vida por todo lo que tuvo que vivir.

En cuanto a las secuelas de la detención y la tortura, indican que doña María Angélica presenta un cuadro de traumatización severa que implica un fuerte factor estresante, consecuencia de la violencia física y psíquica recibida, más el duelo de sus amigos desaparecidos y la permanente persecución que duró 10 años aproximadamente y que la obligaron a recibir ayuda biopsicosocial.

En cuanto a los daños producidos que deben ser indemnizados, indican que son consecuencia de las torturas infligidas a su representada, por la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometida durante el gobierno dictatorial, provocándole el Estado de Chile un perjuicio psíquico y obligándola a abandonar el país sin poder retornar por muchos años, alejándola de su familia y amigos, perdiendo estudios y proyectos de vida, como lo expresa la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Agregan que los daños físicos y psíquicos son distintos de persona en persona, sin embargo, todos tienen en común el daño moral, que es público y notorio, sin poder negarlo caprichosamente.



En cuanto al derecho, señalan que respecto de los hechos delictuosos narrados precedentemente, el Estado de Chile es civilmente responsable, pues quienes secuestraron y torturaron a su representada eran miembros de la Fuerza Aérea de Chile y de la Central Nacional de Informaciones, quienes estaban revestidos de autoridad pública.

Indican que esta responsabilidad del Estado emana del Derecho Administrativo, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daños a personas, específicamente la responsabilidad del Estado que emana de la Constitución Política de 1925, de la Constitución Política de 1980 y del Derecho Internacional, como de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.

Esta responsabilidad del Estado consagrada en la actual Carta Fundamental, tiene antecedentes en aquella de 1925, que se encontraba vigente a la época de los actos ilícitos. Fundan además sus alegaciones en materia constitucional en los artículos 4, 10 N°1, 9 y 10 de la Constitución Política de la República de 1925, que dicen relación con la ya referida responsabilidad del Estado, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y la igual repartición de las cargas públicas, y además, en los artículos 6 y 7 de la actual Constitución Política de la República, que establece la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las facultades que les entrega la ley y que los actos que excedan sus atribuciones adolecen de nulidad.

Agregan que el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República de Chile declara que toda persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado puede recurrir ante los Tribunales de Justicia a objeto de que se resarza el daño causado, consagrándose por ende una acción de carácter constitucional para hacer efectiva la responsabilidad del Estado. Asimismo citan los artículos 4 y 44 de la Ley N° 18.575, que establecen que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones y que además estos órganos serán responsables del daño que causen por falta de servicio.

Por su parte, sostienen que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos, no resultan aplicables a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado por delitos de lesa humanidad, ya que ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, siendo, en consecuencia, este tipo de acciones imprescriptibles.

Añaden que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en los hechos ocurridos durante la dictadura militar mediante diversos actos e instrumentos jurídicos tales como el Informe emitido por la Comisión Nacional de



Verdad y Reconciliación, el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech” y el Informe de la Comisión Asesora presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

En cuanto al daño provocado y al monto de la indemnización que se demanda, refieren que el daño reclamado en la especie, es de carácter moral, el que se expresa en el perjuicio tanto psíquico como físico de carácter permanente, pues aun cuando hayan transcurrido más de cuarenta años desde lo sucedido, su representada continúa con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometida, siendo además obligada a abandonar el país sin poder retornar por muchos años, configurándose claramente con ello un daño moral que se debe indemnizar, el que cuantifican en la suma total de \$300.000.000, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral causado, como consecuencia directa de los ilícitos cometidos en su contra por parte de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que el Tribunal determine en justicia.

Finalmente, para sustentar sus alegaciones añaden jurisprudencia y previas citas legales, solicitan al Tribunal tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva, condenar a la demandada al pago de la suma de \$300.000.000, por concepto de daño moral, con ocasión de la prisión política y torturas a las que fue sometida doña María Angélica Natacha Loyola Loyola, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con costas;

**SEGUNDO:** Que, con fecha 28 de junio de 2018, la parte demandada contesta la acción deducida en su contra, a través de la señora Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, doña Ruth Israel López, solicitando el rechazo de la misma, en base a los siguientes argumentos.

En primer lugar, deduce la excepción de reparación satisfactiva- improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado la demandante, defensa que opone, atendidas las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, haciendo presente al efecto que la Ley N° 19.123, así como otras normas jurídicas conexas, en su conjunto han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a tales víctimas y familiares, estableciéndose al efecto los siguientes mecanismos: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b)



Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, sostiene que en término de costos generales para el Estado de Chile, dicho tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2015, las siguientes sumas de dinero: a) Pensiones: La suma de \$199.772.927.770, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123; b) Pensiones: La suma de \$419.831.652.606, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992; c) Bonos: La suma de \$41.856.379.416, asignada por la ley 19.980, más la suma de \$22.205.934.047, por la ley N° 19.992; c) Desahucio (Bono Compensatorio): la suma de \$1.464.702.888, asignada por la ley N° 19.123; y d) Bono Extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$21.256.000.000.

En síntesis, a diciembre de 2015, el Fisco de Chile ha desembolsado un total de \$706.387.596.727.

En la especie, indica que la actora han recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y 19.992, y sus respectivas modificaciones, que establecieron una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; la suma de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad, y la cantidad de \$1.549.422, para mayores de 75 años de edad.

Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda, correspondiente al acceso a subsidios.

En lo relativo a las reparaciones simbólicas, destaca la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La reconstrucción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.



Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo a los demandantes, no sólo han cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que se han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera, las que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

En efecto, indica que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado, por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Estando entonces la acción deducida en autos basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, así como el tenor de los documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, se opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizados los demandantes.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones y derechos invocados en la demanda, toda vez que de acuerdo al relato de la demandante la detención ilegal, prisión de libertad y tortura se produjeron en el mes de agosto de 1974 y la demanda de autos fue notificada a su parte sólo con fecha 11 de junio de 2018, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la Dictadura Militar.

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515, por cuanto entre la fecha en que se habría hecho exigible el supuesto derecho a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Agrega que en el derecho internacional de los derechos humanos no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento



jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En tercer lugar, en cuanto al daño reclamado y, en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, su parte controvierte expresamente el monto del daño moral demandado, en cuanto a su naturaleza así como a su exorbitante monto, haciendo presente que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificándolo en términos económicos, como el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente de satisfacción.

Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el Tribunal debe considerar todos los beneficios y pagos extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad fue precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por la demandante en su libelo, esto es, desde la notificación de la demanda, por cuanto mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, solicita al Tribunal tener por contestada la demanda de autos, y con su mérito, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha





acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, y en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido;

**TERCERO:** Que, con fecha 12 de julio de 2018, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, haciendo presente que el Fisco de Chile no controvertió los hechos invocados en la demanda y la discusión únicamente se presenta en el ámbito del derecho y de los perjuicios.

En cuanto a la excepción de reparación integral indica que las reparaciones asistenciales a las que alude la demandada no son incompatibles con las indemnizaciones que en esta sede se persiguen, pues son otra forma de reparación de las víctimas de atentados a los derechos humanos.

En lo relativo a la excepción de prescripción, aduce que es contrario a la normativa internacional sobre Derechos Humanos pretender que este tipo de acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que las acciones penales emanadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y por consiguiente, cualquier diferenciación al respecto resultaría discriminatoria y contraria a derecho.

Luego, menciona además que el monto reclamado por concepto de daño moral se encuentran ajustado a la justicia; que este perjuicio se demostrará en la oportunidad procesal correspondiente; que la discusión respecto del daño extra patrimonial es inútil pues el Tribunal será quien lo determinará; y que los reajustes e intereses demandados están acordes a derecho, pues el Tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo a la fecha, razón por lo cual tiene que considerar la desvalorización que se produzca al respecto.

Por tanto, solicita tener por evacuado el trámite de la réplica en los términos señalados;

**CUARTO:** Que, con fecha 02 de febrero de 2018, la demandada evacuó el trámite de la réplica, reiterando las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en el escrito de contestación de la demanda y agregando que la ley N° 19.992 tuvo un fin reparatorio de los daños morales siendo, por tanto, excluyente de otras indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por ser compatibles por ley solo con otras pensiones.

Además, indica que la demandante se encuentra en una situación especial por todos los beneficios compensatorios del daño moral como son el programa de salud Prais, beneficios educacionales y la pensión vitalicia que tienen como causa reparar el daño moral sufrido;

**QUINTO:** Que, mediante resolución de fecha 04 de octubre de 2018, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y



controvertidos los allí señalados, resolución notificada a las partes con fecha 06 de noviembre de 2018;

**SEXTO:** Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió prueba instrumental, consistente, en lo pertinente, en:

1.- Copia simple de escritura pública de fecha 09 de noviembre de 2017, ante Félix Jara Cadot, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, Repertorio N° 37.404/2017, mandato judicial de María Angélica Natacha Loyola Loyola a Magdalena Garcés Fuentes y otros;

2.- Copia simple de certificado de fecha 06 de noviembre de 2017, suscrito por Mabel Utz Giacomozzi, coordinadora de Programa Prais;

3.- Copia simple de certificado, de fecha 06 de noviembre de 2017, suscrito por Claudia Toledo Villanueva, profesional- trabajadora social- programa Prais;

4.- Copia simple de certificado, de fecha 30 de octubre de 2018, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, suscrito por Leonardo Urrutia Álvarez, jefe unidad de colaboración y atención a la ciudadanía, que remite el expediente de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Torturas, conocida como Comisión VALECH II, respecto de la demandante;

**SÉPTIMO:** Que, además, rindió prueba testimonial, compareciendo con fecha 14 de septiembre de 2018, doña **Karen Andrea García Toro**, C.I. N° 13.922.783-2, quien previa y legalmente juramentada e interrogada, expuso en cuanto al primer punto de la interlocutoria de fecha 04 de octubre de 2018, esto es, fecha y circunstancias en que ocurrieron los hechos materia de autos, indicando que el 21 de agosto de 1974, la señora Natacha Loyola almorzaba cerca de su trabajo, cuando llegó una persona a buscarla aduciendo que había ocurrido un robo en su casa estando sus 3 hijas. Agrega que un compañero de trabajo le dijo que era sospechoso ya que toda la mañana había estado una camioneta afuera del trabajo, en el cual se la llevaron, la vendaron y no la trataron amablemente. Que, luego la llevaron a su casa a ver a sus hijas, donde escuchó voces de hombres, trasladándola posteriormente a Londres N° 38, donde fue maltratada verbal y físicamente, al preguntarle por la existencia de armas, de lo que decía no saber. Señala que la desnudaron, la trasladaron a otra habitación con los ojos vendados, sangrando, advirtiéndole que se trataba de militares y reconociendo una voz extranjera, siendo ridiculizada y amenazada con sus hijas, para luego ser dejada en libertad. Además refiere que la demandante fue perseguida por mucho tiempo, obligándola a cambiarse de casa, lo que le consta porque lo ha hablado con ella. En cuanto al punto dos de prueba, esto es, existencia de un acto atribuible al Estado de Chile, realizado por sus agentes, que hubiese ocasionado daños y perjuicios a la demandante, expone que las personas que



la detuvieron, maltrataron y torturaron eran militares, agentes del Estado. Respecto a Londres N° 38, era ocupado por agentes del Estado, denotando un alto nivel de recursos, infraestructura y contactos que solo puede provenir del Estado y obedeciendo a una política de represión contra los detractores. En cuanto al punto tres de prueba, esto es, si como consecuencia de los hechos descritos en autos, la demandante experimentó perjuicios, en su caso, naturaleza y monto de los mismos, expone que no puede darse un monto que signifique una reparación física ni emocional, pero si ello ocurriera sería de \$300.000.000. Preguntada la testigo responde que la demandante es insegura en sus relaciones, le cuesta confiar en las personas y se le coartó la posibilidad de creer en el ser humano, lo que implica tener una relación familiar muy deteriorada, además, de padecer dos enfermedades de origen emocional y autoinmune como es el lupus y la fibromialgia, que se desencadenan por los hechos que tuvo que vivir. Agrega que tiene mucho conflicto con el contacto físico y que tiene un miedo constante al abandono, a quedarse sola y a las pérdidas, manteniendo una relación familiar disfuncional donde sus hijas no se hablan entre ellas, lo que evidencia que no se pudieron desarrollar de manera normal, al estar toda su niñez sometidas a seguimiento y vigilancia, lo que le consta por la cercanía que tiene con la familia y por su formación profesional que le da algunas luces del comportamiento de la demandante. Finalmente, hace presente que hace 20 años la demandante sufrió un accidente vascular con parálisis facial y actualmente tiene constantes problemas a la vejiga y cistitis, que puede estar relacionado con la golpiza y torturas que sufrió.

Acto seguido, comparece doña **Bernarda del Carmen Toro Quezada**, quien previa y legalmente juramentada e interrogada, expuso en cuanto al primer punto de prueba, que los hechos ocurrieron en agosto de 1974, cuando de la DINA fueron a buscar a la demandante a su trabajo, para trasladarla al centro de detención y tortura ubicado en calle Londres, donde le contó que estuvo vendada, escuchando gritos y gemidos, con mucha gente en el suelo y un olor horrible, siendo objeto de malos tratos, presiones y amenazas con sus hijas, quienes estaban retenidas en su casa por los mismos agentes, como le constó cuando la llevaron a su casa vendada. En cuanto al punto dos de prueba, expone que es evidente que lo que le ocurrió fue provocado por agentes del Estado. En cuanto al punto tres de prueba, expone que si bien fue detenida una vez, posteriormente hubo una época larga de persecución, seguimientos y amenazas cometidas por los mismos agentes del Estado, quienes la visitaban en su casa para amenazar que se quedara callada y no contara lo que había ocurrido, lo que se extendió por 10 años, aproximadamente, por lo que es evidente el daño físico y psicológico que no puede ser reparado con ninguna suma de dinero, por lo que no tiene claro el monto que el Estado debe proporcionar y que debe ser el mayor



posible. Preguntada la testigo responde que los daños físicos se reflejan en las enfermedades que padece, que son, lupus, fibromialgia y vértigo. Respecto a la parte psicológica, refiere que la demandante tiene una postura de desconfianza, de temor, manteniendo una vida complicada con su familia e hijas, lo que se explica por las vivencias que vivió toda la familia.

Acto seguido, comparece doña **María Mercedes Parra Domínguez**, quien previa y legalmente juramentada e interrogada, expuso en cuanto al primer punto de prueba, que los hechos ocurrieron en el mes de agosto de 1974, desde el día 22 cuando la demandante fue detenida desde su trabajo por la militancia que ella tenía, en manos de dos personas de civil que eran agente del Estado, siendo torturada en Londres 38, donde la golpearon hasta provocar sangrado durante dos días, hasta que la dejaron en Avenida Matta. Añade que una vez que recuperó su libertad, fue objeto de seguimiento, visitas a su casa, amenazas durante muchos años por los mismos agentes que la detuvieron y torturaron, significándole no tener una vida tranquila, debiendo cambiarse de casa. Señala que le consta lo dicho porque fueron apoderados de sus hijas y compartieron en la pastoral del colegio. En cuanto al punto dos de prueba, expone que es evidente que los hechos ocurridos y cometidos por agentes del Estado, le provocaron las situaciones relatadas. En cuanto al punto tres de prueba, expone que la demandante experimentó perjuicios que se manifestaron en su salud, ya que cualquier complicación a ella se le agrava considerablemente en comparación al resto. En cuanto a la emocional, indica que ella es muy desconfiada, le cuesta hacer amistades, manteniendo una relación regular con sus hijas debido a que después de lo ocurrido ellas se pusieron muy rebeldes, lo que produjo una distancia con las dos mayores. Agrega que a finales de los años 80, la demandante llegó al colegio muy asustada contándole que un hombre la estaba siguiendo, constándole a la testigo porque vio que era cierto, tratándose de un sujeto de civil que la esperaba atentamente, al que reconoció como uno de los sujetos que siempre la seguía, incluso cuando se cambió de casa desde Colina hasta Independencia;

**OCTAVO:** Que, por su parte, la demandada rindió prueba instrumental, consistente, en lo pertinente, en:

1.- Copia simple Resolución Tra N° 45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 30 de agosto de 2017, relativa al nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, en calidad de abogado Procurado Fiscal de Santiago;

**NOVENO:** Que, a solicitud de la parte demandada, de 28 de junio de 2018, el Tribunal ordenó con fecha 05 de julio de 2018, la siguiente diligencia probatoria:



1.- Oficio N° 54761/2018, emitido por el Instituto de Previsión Social, Departamento Gestión de Beneficios, Unidad Valech, Rettig y otros Beneficios Reparatorios, que se encuentra acompañado con fecha 21 de agosto de 2018;

**DÉCIMO:** Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que doña María Angélica Loyola Loyola fue detenida por agentes del Estado, con fecha 21 de agosto de 1974, cuando tenía 34 años de edad, y trasladada a diferentes lugares, uno de ellos calle Londres 38, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas, siendo dejada en libertad con fecha 23 de agosto del mismo año, permaneciendo de este modo detenida por **3 días**, y siendo reconocida posteriormente como víctima de violación a los Derechos Humanos por la Comisión Valech II, según Registro N° 4838;

2.- Que doña María Angélica Loyola Loyola ingresó al Programa Prais Reloncaví con fecha 20 de septiembre de 2011, recibiendo atención médica, psicológica y social en dicho centro, así como en Cesfam Puerto Varas y Hospital de Puerto Montt. Lo anterior en relación al trauma en la salud física, psíquica y social que dejó en la actora la privación ilegal de libertad y las torturas sufridas;

3.- Que doña María Angélica Natacha Loyola Loyola, ha obtenido los siguientes beneficios de reparación de contemplados en las Leyes N° 19.992 y 20.874: pensión acumulada, \$14.943.829; aporte único Ley N° 20.874, \$1.000.000; aguinaldo, \$230.329; esto es, un total pagado de **\$16.174.158**, siendo la pensión actual de \$205.266;

**UNDÉCIMO:** Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por María Angélica Natacha Loyola Loyola, en contra del Fisco de Chile, en atención al daño sufrido producto de su detención y torturas en manos de agentes del Estado, quien fuera reconocida como víctima de violación a los Derechos Humanos, por la denominada Comisión Valech, solicitando una indemnización ascendente a \$300.000.000 por concepto de daño moral.

Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo excepción de pago, por cuanto la actora ha sido reparada mediante desagravios de carácter simbólico y en programas; y haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;

**DUODÉCIMO:** Que, en cuanto a la denominada “excepción de pago” que opone la demandada, por haber sido resarcida la actora en conformidad a la Ley N°



19.123 y N° 19.980, cabe señalar que si bien consta en Ordinario N° 54761-2018, de 02 de agosto de 2018, del Instituto de Previsión Social, que la sra. Loyola Loyola ha recibido beneficios concedidos en las Leyes N° 19.992 y 20.874, por un total de \$16.174.158 a la fecha -sin perjuicio de la pensión mensual que sigue percibiendo, ascendente a \$205.266-, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta magistrado- con una reparación meramente simbólica;

**DÉCIMO TERCERO:** Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral,



toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que “... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada;

**DÉCIMO CUARTO:** Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión de la actora, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, como ya se adelantó, en el motivo décimo precedente, es un hecho de la causa que la demandante fue detenida y trasladada a diversos lugares, entre ellos el centro de reclusión ilegal, Londres 38, en donde fue torturada constantemente durante



los 3 días que permaneció privada de libertad, siendo calificada como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal.

Que, como se adelantó, también se encuentra acreditado en autos, que durante el período de detención, fue objeto de torturas, tanto físicas (golpes; “parrilla eléctrica”, consistente en la aplicación de corriente en distintas partes del cuerpo, etc), como psicológicas (amenazas en relación a su integridad y la de sus 3 hijas), sufriendo diversos vejámenes por parte de agentes del Estado, como se acredita, con la prueba testimonial rendida por la parte demandante y la documental aparejada.

Que, luego, tal como se detalló en el motivo décimo, lo que se ve corroborado con la testimonial rendida en autos que se refiere a los daños psicológicos sufridos por la actores, es evidente que aquella, producto de dicha detención y privación de libertad, ha sufrido daño psicológico, el que se refleja en angustia, temor, trastornos del sueño, estados depresivos y otros.

Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de doña María Angélica Natacha Loyola Loyola.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.





Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

**DÉCIMO QUINTO:** Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama la actora.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

**DÉCIMO SEXTO:** Que, en orden a acreditar su existencia y evaluación, la demandante rindió tanto prueba documental como testimonial, que dan cuenta, de las secuelas psicológicas y emocionales que presenta al día de hoy.



Así, consta de los declarado por las testigos señoreas Karen García Toro, Bernarda Toro Quezada y María Mercedes Parra Domínguez, quienes la conocen, la primera por ser amiga de su hijo, la segunda por ser su amiga y la tercera por haber sido apoderadas del colegio, dando cuenta del daño que sufrió y del temor que padeció aún años después de haber ocurrido los hechos descritos precedentemente, lo que se ve corroborado por certificado Prais y documento denominado “Declaración” suscrito por doña Claudia Toledo Villanueva, trabajadora social del referido programa, que da cuenta de las secuelas permanentes que se observan en la actora, en lo que respecta a sus relaciones interpersonales, como a su ámbito psíquico emocional;

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, si bien la privación de libertad y tortura, en el contexto que se ha reseñado, resulta difícil de calcular y cuantificar, el Tribunal lo regulará prudencialmente en la cantidad total de **veinte millones de pesos (\$20.000.000)**, reiterando lo ya referido en las motivaciones precedentes y haciendo presente que si bien la privación de libertad por motivos políticos y sin causa justificada constituye de por sí una grave violación a los derechos humanos, en este caso se prolongó por 3 días, lo que se condice igualmente con las indemnizaciones fijadas por esta juez en casos análogos;

**DÉCIMO OCTAVO:** Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada;

**DÉCIMO NOVENO:** Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve:

a) Que **se rechazan** las excepciones de pago y prescripción deducidas por la demandada;

b) Que **se acoge, parcialmente**, la demanda de lo principal de 23 de mayo de 2018 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de **veinte millones de pesos (\$20.000.000)** para la demandante



María Angélica Natacha Loyola Loyola, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo octavo precedente;

c) Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelare.

**Rol N° 15.178-2018.**

Pronunciada por doña **Soledad Araneda Undurraga**, Juez Titular.

Autoriza doña **Ximena del Pilar Andrade Hormazabal**, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. En **Santiago, diez de Julio de dos mil diecinueve.-**

